



Luces y sombras del Proyecto de Reforma del Código Penal en materia de instrumentos de pago distintos del efectivo

Fuente: Legal Today

Paralelamente, en línea con el Proyecto de Reglamento MICA, que previsiblemente entrará en vigor en el año 2024, convendría aunar esfuerzos para disponer de una regulación homogénea que alcance, al menos, a todos los estados miembros de la Unión Europea para dotar de estándares comunes a los proveedores de criptoactivos a la hora de establecerse y operar, que a su vez redunde en una mayor transparencia, información y protección a los usuarios y que, en definitiva, dificulte la utilización de esta tecnología disruptiva con fines ilícitos. Pero esto constituye materia más que suficiente como para otro artículo.

Cuestión distinta es que todos los estados miembros de la Unión Europea deban armonizar su política criminal para aunar esfuerzos ante fenómenos globales que demandan una respuesta global, dotando de especial importancia a las normas procesales y de intercambio de información entre estados y autoridades judiciales y policiales que faciliten, simplifiquen y agilicen la persecución de estos delitos que, por la volatilidad del medio en el que se producen, son difíciles de rastrear, haciendo extremadamente complicado revertir sus efectos.

Desde una óptica puramente nacional, podemos plantearnos si esta reforma del Código Penal es realmente necesaria más allá de cumplir con la obligación de transponer una Directiva comunitaria (tarea para la cual, todo sea dicho, llegamos tarde). Particularmente teniendo en consideración los potenciales problemas de concurso de normas que se pueden llegar a plantear y que denotan que en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico penal proporciona normas penales en las que, a priori, los anteriores comportamientos podrían encontrar encaje.

Finalmente, el Proyecto modifica el delito de falsedad de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje para incorporar dentro del objeto material del delito a los instrumentos de pago distintos del efectivo.

Sorprendentemente, el pre legislador no incorpora la previsión que contemplaba el texto del Anteproyecto y que demanda la Directiva con la cual se pretendía perseguir y reprimir el crimen organizado, imponiendo sanciones más graves para los supuestos de que estas modalidades delictivas se cometieran en el ámbito de una organización o grupo criminal, como sucede con otras figuras delictivas tales como el delito de blanqueo de capitales o tráfico de drogas.

Finalmente, cumpliendo con el espíritu de la Directiva, el Proyecto también tipifica la mera obtención y posesión de instrumentos de pago con un propósito fraudulento, sabiendo que se han obtenido ilícitamente, sin necesidad de que se haya iniciado siquiera la ejecución del fraude. Es decir, el Proyecto castiga los actos preparatorios de una potencial estafa, a la vista de la proliferación y peligrosidad de prácticas tan generalizadas como el “phishing”, “smishing”, redirección a webs falsas, etc.

El Proyecto introduce una nueva conducta que recuerda a la estructura típica del delito de apropiación indebida al castigar, además de la sustracción o la adquisición ilícita de instrumentos de pago distintos del efectivo, la apropiación de éstos para su utilización fraudulenta.

